

TRATADO DE EXTRADICION ENTRE MEXICO Y EL BRASIL

TEXTO ORIGINAL.

Tratado publicado en la Segunda Sección del Diario Oficial de la Federación, el martes 12 de abril de 1938.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-
Presidencia de la República.

LAZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:

Que el veintiocho de diciembre de mil novecientos treinta y tres se concluyó y firmó en la ciudad de Río de Janeiro, Estados Unidos del Brasil, por Plenipotenciarios debidamente autorizados al efecto, un Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y la República mencionada, y el dieciocho de septiembre de mil novecientos treinta y cinco se concluyó y firmó en la misma ciudad un Protocolo Adicional a dicho Tratado de Extradición, siendo el texto y forma de dichos actos internacionales, los siguientes:

TRATADO DE EXTRADICION ENTRE MEXICO Y EL BRASIL

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Jefe del Gobierno Provisional de la República de los Estados Unidos del Brasil, deseosos de apoyar la causa de la asistencia internacional contra el crimen, resolvieron celebrar un tratado de extradición y, para ese fin, nombraron sus respectivos Plenipotenciarios, a saber:

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al Señor Doctor Don José Manuel Puig Casauranc, Secretario de Relaciones Exteriores;

El Jefe del Gobierno Provisional de la República de los Estados Unidos del Brasil, al Señor Doctor Afranio de Mello Franco, Ministro de Estado de Relaciones Exteriores;

Los cuales, después de haberse comunicado sus Plenos Poderes, hallados en buena y debida forma, convinieron en las siguientes disposiciones:

ARTICULO PRIMERO (SIC)

Las Partes contratantes se obligan a entregarse, mediante pedido, en las condiciones del presente Tratado, y de acuerdo con las leyes en vigor en cada uno de los dos países, las personas procesadas o condenadas por las autoridades judiciales competentes de uno de los Estados, que se encontraren en el territorio del otro.

ARTICULO II

Autorizan la extradición todas las infracciones a que la ley del Estado requerido imponga pena de un año o más de prisión, comprendidos no sólo los autores y los coautores, más también la tentativa y la complicidad.

ARTICULO III

No será concedida la extradición:

- a).- Cuando el Estado requerido fuere competente, según su legislación, para juzgar el delito imputado al inculcado;
- b).- Cuando, por el mismo hecho que motivare el pedido de extradición, la persona reclamada estuviere siendo procesada o hubiese ya sido definitivamente condenada o absuelta, amnistiada o indultada en el país requerido;
- c).- Cuando la infracción o la pena hubieren prescrito, según la ley del país requeriente o del país requerido, antes de llegar el pedido de prisión provisional o el de extradición al Gobierno del país requerido;
- d).- Cuando la persona reclamada tuviese que responder ante tribunal o juicio de excepción en el país requeriente;
- e).- Cuando se trate de delito político o que le sea conexo, puramente militar, contrario a una religión, o de imprenta.

La alegación del fin o motivo político no impedirá la extradición, cuando el hecho constituya principalmente una infracción común de la ley penal.

En este caso, concedida la extradición, la entrega de la persona reclamada quedará pendiente del compromiso, por parte del Estado requeriente, de que el fin o motivo político no concurrirán a agravar la pena.

Compete exclusivamente a las autoridades del país requerido la apreciación, en la especie, del carácter de la infracción.

ARTICULO IV

El pedido de extradición se hará por vía diplomática, y se instruirá con los documentos siguientes:

- a).- Tratándose de procesados: mandato de prisión o acto equivalente expedidos, uno u otro, por juez o autoridad competentes;
- b).- Tratándose de condenados: sentencia condenatoria ejecutoriada.

§ 1º Estas piezas se adjuntarán en original o en copia auténtica y deberán contener la indicación precisa del hecho imputado, el lugar y la fecha en que el mismo fue cometido, y estar acompañadas de copias de los textos de ley aplicables en la especie, y de los relativos a las prescripciones de la acción penal o la condena.

§ 2º Siempre que sea posible, a estos documentos se acompañarán las señas características y la fotografía de la persona reclamada, así como cualesquiera indicaciones que faciliten su identificación.

§ 3º Las piezas justificativas del pedido de extradición vendrán acompañadas, cuando sea posible, de una traducción en la lengua del Estado requerido.

§ 4º La remisión, por vía diplomática, del pedido de extradición, constituirá prueba suficiente sobre la autenticidad de los documentos presentados en su apoyo, los cuales, de esta forma, se considerarán legalizados.

ARTICULO V

En caso de urgencia, cualquiera de las Partes contratantes podrá pedir a la otra, directamente, por vía postal o telegráfica, o por intermedio de sus respectivos agentes diplomáticos y consulares, la prisión provisional del inculpado y la aprehensión de los objetos relacionados con el delito que le sea imputado.

El pedido de prisión deberá contener la declaración de existencia de uno de los documentos enumerados en las letras a y b del artículo precedente, y la indicación de la infracción que autorice la extradición según este Tratado.

Si, dentro de noventa días, contados desde aquel en que se hubiere efectuado la prisión provisional, el Estado requerido no recibiere el pedido formal de extradición debidamente instruido, el detenido será puesto en libertad, sin perjuicio del proceso de extradición.

ARTICULO VI

Concedida la extradición, el representante del Estado requeriente será notificado de que el inculpado se encuentra a su disposición.

Si, ochenta días después de esta notificación, el inculpado no hubiere sido remitido al Estado requeriente, será puesto en libertad y no podrá ya ser preso por el mismo motivo que sirvió de fundamento al pedido de extradición.

ARTICULO VII

Todos los objetos, valores, o documentos que se relacionaren con el acto delictuoso o que fueren encontrados en poder de la persona reclamada, en su equipaje o en su domicilio, serán aprehendidos y entregados, juntamente con el inculpado, al representante del Estado requeriente.

Igualmente se entregarán a éste los objetos de tal género posteriormente encontrados.

Los objetos y valores de la naturaleza indicada, que se hallen en poder de terceros, serán también aprehendidos y entregados al Estado requeriente, si el Estado requerido pudiese disponer de ellos conforme a su legislación interna.

Se reservan, en todo caso, los derechos de terceros.

La entrega de los objetos y valores al Estado requeriente, se efectuará aun en el caso en que la extradición, ya concedida, no haya podido llevarse a cabo por motivo de muerte o evasión del inculpado, o bien a consecuencia de cualquier otro hecho que se oponga a que se efectúe.

ARTICULO VIII

Si la pena en que incurriere el inculpado fuere de muerte o corporal, según la legislación del Estado requeriente, la extradición sólo será concedida si el Gobierno requeriente asume, por la vía diplomática, el compromiso de conmutar la pena por la de prisión.

ARTICULO IX

Los Estados contratantes se obligan a no hacer penalmente responsable al inculpado por delito perpetrado antes de la extradición y diferente del que haya motivado tal extradición, salvo si el Estado requerido hubiere consentido en un proceso ulterior.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no tendrá aplicación si el inculpado, libre y expresamente, consiente en ser juzgado por otros hechos, o si, puesto en libertad, permanece en el territorio del Estado a que fue entregado, por tiempo mayor de un mes, o bien todavía si, habiendo abandonado el mismo territorio, regresa a él espontáneamente.

La declaración de libre consentimiento del inculpado, a que se refiere el párrafo segundo de este artículo, será comunicada al otro Estado por vía diplomática, en original o copia legalizada.

Las disposiciones de este artículo son aplicables al caso de reextradición a un tercer Estado.

ARTICULO X

Cuando el inculpado estuviere siendo procesado o sujeto al cumplimiento de pena de prisión por hecho diferente, practicado en el país del refugio, la extradición podrá ser concedida, pero la entrega misma sólo se efectuará después de terminado el proceso o de extinta la pena.

ARTICULO XI

Cuando la persona cuya extradición se ha pedido de conformidad con el presente Tratado, fuere igualmente reclamada por otro u otros Gobiernos, se procederá de la manera siguiente:

a).- Si se trata del mismo hecho, se dará preferencia al pedido del país en cuyo territorio se hubiere cometido el delito;

b).- Si se trata de hechos diferentes, se dará preferencia al pedido del Estado en cuyo territorio se hubiere cometido el delito más grave, a juicio del Estado requerido;

c).- Si se trata de hechos que el Estado requerido repute de igual gravedad, la preferencia se determinará por la prioridad del pedido.

ARTICULO XII

La persona que, después de ser entregada por uno de los Estados contratantes al otro, logre substraerse a la acción de la justicia y nuevamente se refugie en el territorio del Estado requerido o pase por él en tránsito, será detenida, mediante petición diplomática o consular, y entregada de nuevo, sin otras formalidades, al Estado al cual ya se había concedido su extradición.

ARTICULO XIII

El permiso de tránsito por el territorio de una de las Partes contratantes, de persona entregada por un tercer Estado a la otra Parte, será concedido, independientemente de cualesquiera formalidades judiciales, mediante simple pedido formulado por vía diplomática y acompañado de copia legalizada de una de las piezas de que tratan las letras a) y b) del artículo IV del presente Tratado, o de la resolución del Gobierno que haya concedido la extradición.

Las autoridades del país de tránsito ejercerán sobre el inculpado la vigilancia que fuere necesaria.

Es lícito a las Partes contratantes el rehusar el permiso para el tránsito, cuando a ello se opongan graves motivos de orden público, o cuando el hecho que haya motivado la extradición no la autorice conforme al presente Tratado.

ARTICULO XIV

Cuando, en algún proceso penal iniciado ante la justicia de uno de los Estados contratantes, seriere necesario el testimonio o citación de testigos que se encuentren en el territorio de uno de ellos, o cualquier otro acto de instrucción, la autoridad judicial competente de uno de los Estados contratantes podrá, por la vía diplomática, dirigir a la del otro Estado un exhorto que, siempre que sea posible, deberá acompañarse de una traducción en español o en portugués, según que haya de ser ejecutado en México o en el Brasil.

ARTICULO XV

Los gastos de la extradición hasta el momento de la entrega del inculpado, correrán por cuenta del Estado requerido; los posteriores a la entrega, quedan a cargo del Estado requeriente.

A éste corresponderán, igualmente, los gastos de tránsito.

Los gastos que resulten de la ejecución de exhortos expedidos conforme al artículo precedente, serán costeados por la justicia solicitada, salvo cuando se trate de pericias penales, médico-legales o comerciales.

ARTICULO XVI

El presente Tratado será ratificado, una vez llenadas las formalidades legales en cada uno de los Estados contratantes, y las ratificaciones serán canjeadas en la ciudad de México, dentro del más breve plazo posible.

Entrará en vigor un mes después del canje de ratificaciones, conservando su validez hasta seis meses después de su denuncia, que podrá hacerse en cualquier momento.

El Tratado ha sido redactado en español y en portugués, y ambos textos hacen fe por igual.

En testimonio de lo cual, los Plenipotenciarios arriba expresados firmamos el presente Tratado, en dos ejemplares, imponiendo en ellos nuestros sellos.

Hecho en Río de Janeiro, D.F., a los veintiocho días del mes de diciembre del año de mil novecientos treinta y tres.

(L. S.) Puig.

(L. S.) Afranio de Mello Franco.

N. DE E. TEXTO EN PORTUGUES

TRATADO DE EXTRADICAO ENTRE O MEXICO E O BRASIL

O Presidente dos Estados Unidos Mexicanos e o Chefe do Govêrno Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, desejosos de apoiar a causa da assitência internacional contra o crime, resolveram celebrar un tratado de extradicação, e, para êsse fim, nomearam seus Plenipotenciários, a saber:

O Presidente dos Estados Unidos Mexicanos, ao Senhor Doutor José Manuel Puig Casauranc, Ministro das Relações Exteriores;

O Chefe do Govêrno Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, ao Senhor Doutor Afranio de Mello Franco, Ministro de Estado das Relações Exteriores;

Os quais, depois de se haverem trocado seus plenos poderes, achados em boa e devida forma, convieram nas disposições seguintes:

ARTIGO I

As Partes contratantes obrigamse a entregar, uma à outra, mediante pedido, nas condições do presente Tratado, e de accôrdo com as leis em vigor em cada um dos dois países, as pessoas processadas ou condenadas pelas autoridades judiciárias competentes de um dos dois Estados, que se encontrarem no territorio do outro.

ARTIGO II

Autorizam a extradicação todas as infracções a que a lei do Estado requerido imponha pena de um ano ou mais de prisão, compreendidas não só a autoria e a coautoria, mas também a tentativa e a cumplicidade.

ARTIGO III

Não será concedida a extradicação:

a).- Quando o Estado requerido fôr competente, segundo sua legislação, para julgar o crime imputado ao extraditando;

b).- Quando, pelo mesmo fato que motivar o pedido de extradicação, a pessoa reclamada estiver sendo processada ou já tiver sido definitivamente condenada ou absolvida, anistiada ou indultada no país requerido;

c).- Quando a infração ou a pena estiver prescrita, segundo a lei do país requerente ou do país requerido, antes de chegar o pedido de prisão provisória ou o de extradição ao Governo do país requerido;

d).- Quando a pessoa reclamada tiver de responder, no país requerente, perante tribunal ou juízo de exceção;

e).- Quando se tratar de crime político ou que lhe seja conexo, puramente militar, contra religião, ou de imprensa.

A alegação de fim ou motivo político não impedirá a extradição, quando o fato constituir principalmente infração comum da lei penal.

Neste caso, concedida a extradição, a entrega da pessoa reclamada ficará dependente de compromisso, por parte do Estado requerente, de que o fim ou motivo político não concorrerá para agravar a penalidade.

Compete privativamente as autoridades do país requerido a apreciação, em espécie, do caráter da infração.

ARTIGO IV

O pedido de extradição será feito por via diplomática, e instruído com os seguintes documentos:

a).- Tratando-se de processados, mandado de prisão (sic) ou ato equivalente expedido, um ou outro, por juiz ou autoridade competente;

b).- Tratando-se de condenados, sentença condenatória passada em julgado.

§ 1º Essas peças serão juntas em original ou em cópia autêntica e deverão conter a indicação precisa do fato incriminado, o lugar e a data em que o mesmo foi cometido, e ser acompanhadas de cópia dos textos de lei aplicáveis a espécie e dos relativos a prescrição da ação penal e da condenação.

§ 2º Sempre que seja possível, a esses documentos acompanharão os sinais característicos e a fotografia da pessoa reclamada, bem como quaisquer indicações capazes de facilitar a sua identificação.

§ 3º As peças justificativas do pedido de extradição, serão, quando possível, acompanhadas de sua tradução na língua do Estado requerido.

§ 4º A apresentação, por via diplomática, do pedido de extradição constituirá prova suficiente da autenticidade dos documentos produzidos em seu apoio, os quais, dessa forma, serão havidos por legalizados.

ARTIGO V

Em caso de urgencia, as Partes contratantes poderão pedir, uma a outra, diretamente por via postal ou telegráfica, ou por intermédio de seus respectivos agentes diplomáticos ou consulares, a prisão provisória do inculcado e a apreensão dos objetos relacionados com o crime que lhe seja imputado.

O pedido de prisão deverá conter a declaração da existencia de um dos documentos enumerados nas letras a) e b) do artigo precedente e a indicação de infracção que autorize a extradicação segundo este Tratado.

Si, dentro em noventa dias, contados daquele em que se houver efectuado a prisão provisória, o Estado requerido não receber o pedido formal de extradicação devidamente instruído, será o detido posto em liberdade, sem prejuizo do processo de extradicação.

ARTIGO VI

Concedida a extradicação, o representante do Estado requerente será avisado de que o extraditando se encontra à sua disposição.

Si, oitenta dias depois dêsse aviso, o extraditando não tiver sido remetido para o Estado requerente, será posto em liberdade e não mais poderá ser preso pelo mesmo motivo que serviu de fundamento ao pedido de extradicação.

ARTIGO VII

Todos os objetos, valores ou documentos que se relacionarem com o fato criminoso e forem encontrados em poder da pessoa reclamada, em sua bagagem ou em seu domicilio, serão apreendidos e entregues, juntamente com o inculcado, ao representante do Estado requerente.

Igualmente serão a este entregues os objetos do mesmo genero, posteriormente encontrados.

Os objetos e valores da natureza indicada, que se acharem em poder de terceiros, serão também apreendidos e entregues ao Estado requerente, si dêles puder dispôr o Estado requerido, de conformidade com sua legislação interna.

Em todos os casos, ficam reservados os direitos de terceiros.

A entrega dos objetos e valores ao Estado requerente efectuar-se-á mesmo no caso em que a extradicação, já concedida, não tenha pedido executar-se por motivo de morte ou evasão do inculcado ou, ainda, em consequência de qualquer outro ato que se oponha a sua efectivacão.

ARTIGO VIII

Si fôr de morte ou corporal a pena em que, segundo a legislação do Estado requerente, incorrer o extraditando, a extradicação só será concedida si o Govêrno requerente assumir, por via diplomática, o compromisso de comutar a pena na de prisão.

ARTIGO IX

Os Estados contratantes obrigam-se a não responsabilizar criminalmente o extraditado por crime perpretado antes da extradicação e diverso do que a tenha motivado, salvo si o Estado requerido houver consentido em ulterior processo.

O disposto na alínea anterior não terá aplicação si o inculpado, livre e expressamente, consentir em ser julgado por outros fatos, ou si, posto em liberdade, permanecer no territorio do Estado a que foi entregue por tempo excedente a um mês, ou, ainda, si, havendo deixado o mesmo território, a êle regressar espontâneamente.

A declaração de livre consentimento do inculpado, a que se refere a alínea 2ª dêste artigo, será transmitida, ao outro Estado, por via diplomática, em original ou cópia legalizada.

As disposições dêste artigo são aplicáveis ao caso de reextradicação a terceiro Estado.

ARTIGO X

Quando o inculpado estiver sendo processado ou sujeito a cumprimento de pena de prisão por fato diverso, praticado no país de refúgio, a extradicação poderá ser concedida, mas a entrega só se fará efetiva depois de findo o processo ou extinta a pena.

ARTIGO XI

Quando a pessoa cuja extradicação, pedida na conformidade do presente Tratado, fôr igualmente reclamada por um ou vários outros govêrnos, procedêr-se-á da maneira seguinte:

a).- Si se tratar do mesmo fato, será dada preferência ao pedido do país em cujo território a infracção houver sido cometida;

b).- Si se tratar de fatos diferentes, dar-se-á preferência ao pedido de Estado em cujo território houver sido cometida a infracção mais grave, a juízo do Estado requerido;

c).- Si se tratar de fatos que o Estado requerido repute de igual gravidade, a preferência será determinada pela prioridade do pedido.

ARTIGO XII

A pessoa que, depois de entregue por um ao outrodos Estados contratantes, lograr subtrair-se a ação da justiça e se refugiar novamente no território do Estado requerido ou por êle passar em trânsito, será detida, mediante requisição diplomática ou consular, e entregue, de novo, sem outras formalidades, ao Estado ao qual já fora concedida a sua extradicação.

ARTIGO XIII

A permissão de trânsito pelo território de uma das Partes contratantes, de pessoa entregue por terceiro Estado a outra Parte, será concedida independentemente de quaisquer formalidades judiciárias, mediante simples pedido, formulado por via diplomática, e acompanhado de cópia legalizada de uma das peças judiciárias de que tratam as letras a) e b) do artigo IV do presente Tratado, ou da resolução de govêrno que haja concedido a extradicação.

As autoridades do país de trânsito exercerão sôbre o inculpado a vigilância que se tornar necessária.

E lícito as Partes contratantes recusar permissão para o trânsito quando a êle se oponham graves motivos de ordem pública ou quando o fato, que tenha motivado a extradicação, nao a autorize, segundo este Tratado.

ARTIGO XIV

Quando, em processo penal, iniciado perante as justicas de um dos Estados contratantes, se fizer necessário o depoimento ou a sitação de testemunhas que se encontrarem no território de um dêles, bem com oqualquer outro ato de instrução, a autoridade judiciária competente de um, poderá expedir a do outro dos Estados contratantes, para êsse fim, por via diplomática, carta rogatória que deverá ser acompanhada, sempre que fôr possível, de tradução em espanhol ou em português, conforme haja de ser executada no México ou no Brasil.

ARTIGO XV

As despesas com a extradicação, até o momento da entrega do extraditando, correrão por conta do Estado requerido; as posteriores a entrega ficarão a cargo do Estado requerente.

A este caberão, por igual, os gastos com o trânsito.

As despesas decorrentes da execução de cartas rogatorias, expedidas na forma do artigo precedente, serão custeadas pelas justicas deprecadas, salvo quando se tratar de perícias criminais, médico-legais ou comerciais.

ARTIGO XVI

O presente Tratado será ratificado, depois de preenchidas as formalidades legais em cada um dos Estados contratantes, e suas ratificações serão trocadas na cidade do México, no mais breve prazo possível.

Entrará em vigor um mês depois de troca das ratificações, permanecendo válido até seis meses após sua denúncia, que se poderá verificar em qualquer momento.

O Tratado é redigido em espanhol e em português, e ambos os seus textos farão fé igualmente.

Em testemunho do que, os Penipotenciarios (sic) acima indicados assinamos o presente Tratado, em dois exemplares, neles aponto os nossos selos.

Feito no Rio de Janeiro, D. F., aos vinte e oito dias do mês de Dezembro do ano de mil novecentos e trinta e três.

(L. S.) Puig.

(L. S.) Afranio de Mello Franco.

PROTOCOLO Adicional al Tratado de Extradición Brasileño-Mexicano de 28 de diciembre de 1933.

ARTICULO 1º

Las Partes contratantes no están obligadas a entregar, una a la otra, sus respectivos nacionales, ni a permitir el tránsito por sus territorios, del nacional de una de ellas, entregado a la otra por un tercer Estado.

ARTICULO 2º

El nacional de uno de los Estados contratantes que se refugie en su país, después de haber practicado el crimen en la jurisdicción del otro, podrá ser denunciado por las autoridades del Estado donde el crimen ha sido cometido, a las del país del refugio.

La denuncia deberá ser acompañada de las pruebas y la persona acusada sometida a la justicia de su país, en los casos en que lo permitan sus leyes.

ARTICULO 3º

La naturalización posterior a la comisión del crimen que sirviere de fundamento al pedido de extradición, no constituirá obstáculo a la entrega del acusado.

ARTICULO 4º

Las Partes contratantes concuerdan en sustituir por las disposiciones del presente Protocolo Adicional, las que se refieren a la nacionalidad de las personas pasibles de extradición, del Tratado de Extradición celebrado entre las mismas en Río de Janeiro, el 28 de diciembre de 1933, el cual queda en vigor en todas las demás disposiciones.

ARTICULO 5º

Las disposiciones del artículo XVI del citado Tratado de Extradición, serán aplicadas al presente Protocolo Adicional para regularizar las condiciones de su ratificación, entrada en vigor, duración y denuncia.

(L. S.) Alfonso Reyes.

(L. S.) José Carlos de Macedo Soares.

Río de Janeiro, 18 de septiembre de 1935.

PROTOCOLLO Adicional ao Tratado de Extradicação Brasileiro-Mexicano de 28 de dezembro de 1933.

ARTIGO 1º

As partes contratantes não são obrigadas a entregar, uma a outra, os seus respectivos nacionaes, nem a consentir no transito por seus territórios, do nacional de uma dellas, entregue á outra por terceiro Estado.

ARTIGO 2º

O nacional de um dos Estados contractantes (sic), que se refugiar em seu paiz, depois de haver practicado crime na jurisdicão do outro, poderá ser denunciado, pelas autoridades do Estado, onde o crime foi commettido, ás do paiz de refugio.

A denuncia deverá ser acompanhada de provas e a pessoa incriminada submettida ás justicas de seu paiz, nos casos em que o permittam as suas leis.

ARTIGO 3º

A naturalização posterior a pratica do crime que servir de fundamento ao pedido de extradicação, não constituirá obstaculo a entrega do inculpado.

ARTIGO 4º

As Partes contractantes (sic) concordam em substituir pelas disposições do presente Protocollo Adicional as que se referem a nacionalidade das pessoas passíveis de extradicação, do Tratado de Extradicação entre as mesmas celebrado no Rio de Janeiro, a 28 de Dezembro de 1933, o qual fica em vigor em todas as demais disposições.

ARTIGO 5º

As disposições do artigo XVI do citado Tratado de Extradicação serão applicadas ao presente Protocollo Adicional para regular as condições da sua ratificação, entrada em vigor, duração e denuncia.

(L. S.) José Carlos de Macedo Soares,

(L. S.) Alfonso Reyes.

Rio de Janeiro, 18 de Setembro de 1935.

Que la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión dio su aprobación a los preinsertos Tratado y Protocolo Adicional, respectivamente, el seis de noviembre de mil novecientos treinta y cuatro y el veintitrés de diciembre de mil novecientos treinta y cinco; y habiendo sido ratificados por mí dichos Actos Internacionales, el dieciocho de enero de mil novecientos treinta y ocho, se efectuó el canje de ratificaciones el veintitrés de febrero del mismo año.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo octogésimonoveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, a los ocho días del mes de marzo de mil novecientos treinta y ocho.- L. Cárdenas.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores, Eduardo Hay.- Rúbrica.- Al C. Lic. Ignacio García Téllez, Secretario de Gobernación.- Presente.